



*Misión Permanente de la República Bolivariana de  
Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y  
demás Organismos Internacionales  
con sede en Ginebra*

Nº 0847 – 2021

**La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra**, saluda atentamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oportunidad de hacer referencia a su comunicación S/N, de fecha 10 de enero de 2019 (cuya fecha correcta es el 10 de enero de 2020), mediante la cual remitió un llamamiento urgente del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, relacionado con el presunto allanamiento de las oficinas de la agencia de noticias Venepress y del canal de televisión Telecaribe, el día 18 de diciembre de 2019.

Al respecto, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, tiene a bien remitir en anexo al presente, la información proporcionada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela en respuesta a este asunto.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, agradece a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que la presente información sea remitida para el conocimiento y consideración del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, y queda a la entera disposición a los fines de brindar ulteriores informaciones que puedan surgir sobre el particular.

**La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra**, aprovecha la oportunidad para renovar a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las seguridades de su más alta consideración.



Ginebra, 29 de abril de 2021

**Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  
para los Derechos Humanos  
Ginebra**

## INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRESUNTO ALLANAMIENTO Y CIERRE DE LA AGENCIA DE NOTICIA VENEPRESS Y DEL CANAL DE TELEVISIÓN TELECARIBE

1. Vista la solicitud realizada por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión Ref. AL VEN 8/2019, en relación con el presunto allanamiento y cierre de la agencia de noticia **VENEPRESS** y el canal de televisión **TELECARIBE**, el Estado venezolano tiene a bien brindar la siguiente información.
2. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y protege el derecho de toda persona a la libertad de expresión (artículo 57) y el Estado venezolano respeta ese derecho en la práctica.
3. Para el año 2019, en la República Bolivariana de Venezuela operan 934 emisoras de radio FM, de las cuales 535 son privadas (57%), 308 son comunitarias (33%) y 91 son públicas (10%). Asimismo, operan 182 emisoras de radio AM, de las cuales 171 son privadas (94%) y 11 son públicas (6%). Adicionalmente, se cuenta con 343 estaciones de televisión abierta, distribuidas en 160 privadas (47%), 160 comunitarias (47%) y 23 públicas (7%), una clara muestra de la democratización del espectro radioeléctrico y el impulso que la comunicación popular tiene como medio de expresión entre la población.
4. Los hechos referidos por el Relator Especial en su llamamiento urgente se relacionan con un proceso penal seguido contra el señor [REDACTED], propietario del canal de televisión TeleCaribe y la agencia de noticias Venepress, por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para delinquir.
5. El proceso penal en cuestión se inició dada la presunta vinculación con empresas que son utilizadas como vehículo o plataformas para la obtención de instrumentos financieros y mezcla de fondos ilícitos, sin poseer activos significativos u operaciones propias.
6. La orden de allanamiento y medida innominada, así como la incautación y administración especial de los bienes muebles e inmuebles del señor [REDACTED] fue solicitada en fecha 2 de diciembre de 2019 por la Fiscalía Septuagésima Tercera (73°) Nacional con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. Esta solicitud se realizó como resultado de la investigación iniciada el 26 de noviembre de 2019, identificada UNIF-DGC-DIF-2019-04910.
7. Entre los diversos elementos de convicción recabados durante la investigación por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), se dejó constancia de las circunstancias que vinculan al señor [REDACTED], junto a otras personas en presuntas actividades financieras irregulares, es decir, que no se ajustan al ordenamiento jurídico venezolano.
8. Como resultado de la investigación, se determinó que el señor [REDACTED] es accionista, representante legal o director de al menos cuarenta y siete (47) sociedades mercantiles. 17 de ellas se encuentran en el territorio nacional, dentro de las cuales destacan Venepress y TeleCaribe y 20 en los Estados Unidos de América.

9. Asimismo, se determinó la presunta vinculación del señor [REDACTED] con la señora [REDACTED] el señor [REDACTED], quienes se encuentran solicitados y requeridos en extradición por parte de las autoridades venezolanas ante el Reino de España por estar señalados directamente en la investigación relacionada con el caso de los "*Panamá Papers*", donde se demostró que estos señores constituyeron empresas "*fantasmas*" o de "*maletín*" en Panamá, con el objeto de legitimar capitales provenientes del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) y la Oficina Nacional del Tesoro.
10. En fecha 2 de diciembre de 2019, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados Delitos Asociados al Terrorismo con jurisdicción a nivel Nacional adoptó la precalificación de la Fiscalía sobre los delitos de **Legitimación de Capitales**, previsto y sancionado en el artículo 35 y **Asociación para delinquir**, previsto y sancionado en el artículo 37, ambos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
11. De igual forma, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a nivel Nacional acordó, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, medida innominada dirigida a la incautación y administración especial de bienes muebles e inmuebles del señor [REDACTED], siendo puestos a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT).
12. Adicionalmente, se dispuso, de conformidad con el artículo 56 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la inmovilización de todas las cuentas bancarias y demás productos financieros a nombre del señor [REDACTED] y se dictó la prohibición de enajenar y gravar todos los bienes muebles e inmuebles.
13. El 13 de diciembre de 2019, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados Delitos Asociados al Terrorismo con jurisdicción a nivel Nacional acordó la orden de allanamiento a los bienes muebles e inmuebles propiedad del señor [REDACTED], todo ello perfectamente ajustado a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos relevantes.
14. La orden de allanamiento fue ejecutada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como organismo de investigación penal designado por el Tribunal de la causa. Esta orden incluyó las oficinas de Telecaribe y Venepress, por encontrarse dentro de los bienes presuntamente pertenecientes al señor [REDACTED]
15. Las actuaciones en el presente caso fueron realizadas por el SEBIN, actuando como un órgano de investigación penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Código Orgánico Procesal Penal que establece:

*Código Orgánico Procesal Penal*

**"Artículo 113.** Son órganos de policía de investigaciones penales los funcionarios o funcionarias a los cuales la ley acuerde tal carácter, y todo otro



*funcionario o funcionaria que deba cumplir las funciones de investigación que este Código establece.”*

16. En virtud de las amplias informaciones aportadas y las explicaciones brindadas por el Estado venezolano, se solicita que el presente asunto se dé por concluido, informando lo aquí expuesto al Consejo de Derechos Humanos para su conocimiento.
17. Finalmente, el Estado venezolano ratifica que, en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales, continuará cooperando con el Relator Especial y demás procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en el marco de lo establecido en sus respectivos mandatos y en el Código de Conducta aprobado en la Resolución 5/2 del Consejo de Derechos Humanos.